

la columna
DE RAMÓN DÍAZ

SOBRE ESTO Y AQUELLO

Tras el conflicto de la salud, ha llegado el momento de inquirir sobre el sentido del episodio, más allá de la anécdota plagada de marchas y contramarchas, de ruido y de furia, como diría Shakespeare. Sin duda el enfrentamiento ha dejado entrever aspectos sumamente importantes sobre nuestra realidad económica y social, la cual —en la opinión de este articulista— hace temer obstáculos en el camino hacia una franca recuperación, que los indicadores están anunciando.

El éxito del canje de la deuda, la reiteración de mensajes positivos del índice líder de Ceres, el crecimiento intra 2003, la reducción del desempleo, el curso apacible



La ola de aumentos salariales que se viene arriesga retrotraer en buena parte las finanzas públicas a la situación ante-devaluación

Detrás de la fachada

del tipo de cambio, las buenas noticias políticas de Brasil, el crecimiento de las exportaciones, la afirmación del mercado inmobiliario, en fin, toda una batería de factores positivos, propiciaban en los uruguayos un talante optimista, que las incógnitas derivadas de la extravagante gestión del señor K allende el Plata no llegaban a frustrar. De pronto una acción sindical rebosante de energía obtuvo una resonante victoria sobre una respuesta balbuceante, y eminentemente débil, del gobierno. ¿Podemos hacernos ilusiones de que se tratará solamente de una tempestad aislada, tras cuya consumación las aguas retornarán apacibles a sus cauces? Difícilmente. Por de pronto, huelga señalar que el precedente no será echado en saco roto por los dirigentes sindicales del resto del sector público, y en tal sentido ya hay señales concretas, con las graves consecuencias sobre las finanzas públicas que ello suscitaría. Ahora bien: ¿es posible ir más lejos en el análisis de las amenazas que nos cercan? Es lo que querría intentar en esta columna.

Por de pronto, es preciso pre-

guntar: la firmeza que en esta ocasión faltó en el gobierno, ¿podrá recuperarse en lo sucesivo? Digamos, incentivada por las perspectivas de un colapso fiscal. ¿Caber representarse al Ejecutivo, en tal caso, declarando esencialidad de servicios, eventualmente medidas prontas de seguridad? Creo que tal posibilidad es remota. Y no lo digo sólo en función de los precedentes. Creo que ese flanco del gobierno es inevitablemente débil. En primer lugar, una tradición que dura ya un tercio de siglo parece haber excluido las medidas drásticas por parte de gobiernos civiles, por constitucionales que puedan ser. Por mucho menos de lo que acabo de sugerir, los sindicatos podrían volcar la opinión pública contra el gobierno bajo el cargo de “represión fascista”.

Pero eso no es lo más grave. Hay que considerar el factor psicológico, en ambos lados de los potenciales enfrentamientos. Del lado sindical, una estrategia agresiva requiere, para su éxito, la convicción de que las reivindicaciones son justas, tanto al nivel de la jerarquía como de las masas. Del lado gubernamental, una resistencia vigorosa

exige creer que los funcionarios están aprovechando una coyuntura favorable y que la justicia está en no ceder. Pues bien, en este aspecto, el gobierno lleva las de perder. En efecto, ambos bandos saben perfectamente, lo mismo que la opinión ciudadana, lo mismo que el propio gobierno, que no hay una norma salarial en el sector público, sino una colección de distinciones arbitrarias, coronadas por un

Mientras no se normalice la cuestión salarial en el sector público, la situación fiscal se mantendrá afectada por una franca inestabilidad

número no pequeño de extravagantes privilegios. Mientras no se normalice la cuestión salarial en el sector público, la situación fiscal del país se mantendrá afectada por una franca inestabilidad.

Para ello pesa también el hecho de que, frente a la crisis financiera de 2002, cuando el país asistió al colapso de su producto, el cual

eventualmente se redujo en aproximadamente 50 % en términos de dólares (el numerario de su deuda pública), la única medida importante que adoptaron las autoridades, descartando toda reforma estructural, frente a la consiguiente caída de la recaudación y la persistencia de sus compromisos fiscales, fue la devaluación, con la consiguiente “licuación” de todos los rubros presupuestales establecidos en pesos, salarios y pasividades incluidos. La ola de aumentos salariales que se viene arriesga retrotraer en buena parte las finanzas públicas a la situación ante-devaluación, lo que amenazaría con, o bien el default con sus acreedores corrientes en pesos, funcionarios públicos incluidos, o bien —si el Banco Central se lanza a imprimir billetes para financiar la Tesorería— inflación galopante.

Conviene que nos detengamos a pasar revista a lo que ha estado ocurriendo con los salarios en 2002 y 2003. 2002 fue el año calamitoso. La devaluación golpeó de mala manera la capacidad de consumo de los asalariados, pero, bajo la impresión de la catástrofe, éstos

se abstuvieron de reclamar aumentos. En el sector público, en los 12 meses entre agosto 2001 y julio 2002, las remuneraciones de los empleados públicos aumentó 0,5% y las de los privados bajaron 1,1%, ambos en términos nominales. La situación fiscal, con salarios públicos prácticamente constantes y aumento de la recaudación por el efecto de la devaluación sobre los bienes importados y exportados, mejoró. Pero en la segunda parte de 2002 el miedo se debilitó y los trabajadores se cansaron de tener tan apretado el cinturón: los salarios públicos, en los 12 meses siguientes (agosto de 2002 a julio de 2003) aumentaron a una tasa anualizada de 9,2%, y la de los privados a la de 5,9%. Ambas lejos por encima de la tendencia anual del tipo de cambio, que en los segundos 12 meses se situó en un alza del 1,7%. Si encima nos espera un desplome del frente fiscal por la ofensiva sindical, la situación se entrevé inquietante.

Es evidente que los salarios públicos no pueden recuperar el nivel real de 1998 con un PBI reducido en algo así como un 50%. La cuestión va más allá de una cuestión de distribución, y llega a que no habría recursos reales para pagarlos. La tentativa de lograrlo por la vía del ajuste nominal de las remuneraciones no podría sino desembocar, según se señala más arriba, en una inflación descontrolada o un default generalizado del gobierno. Lo cual nos lleva a un ulterior enfoque de la situación bajo examen. El consiste en señalar que los líderes sindicales —por más que estén motivados por la injusta distribución dentro del sector laboral de los gobiernos nacional y locales (lo cual presumo, porque objetivamente ahí está su fuerza)— de hecho actúan y hablan como si en la trinchera de enfrente hubiese un tesoro inagotable al que su agresividad les permitiría tener acceso. Y no sólo es ello así, sino que el gobierno nacional, presuntamente para apaciguar las expectativas, se cuida mucho de utilizar el principal argumento que puede esgrimir para decir “no”, o sea el de prevenir el cataclismo. Frente a lo cual, habría que recordarle que con ello no está evitando, sino sólo postergando, un inquietante desenlace. Esta tesitura gubernamental debería ser prestamente revisada. Admitiendo que ya es tarde para que las autoridades adopten las reformas estructurales que han prometido en vano, lo único que le queda al gobierno es hablar claro. Y ello sin demora.